

Acuerdo de 17 de julio de 2024, del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, sobre la adopción de medidas provisionales, en relación con el expediente de contratación de “Suministro de productos consumibles con cesión de equipos para la realización de determinaciones analíticas del Programa De Cribado Neonatal de enfermedades Endocrino-Metabólicas de la Comunidad de Madrid en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón”, número de expediente A/SUM-004379/2024.

Con fecha 5 de julio de 2024 se ha recibido en este Tribunal escrito de la representación legal de REVVITY, SL, contra la resolución de la Directora Gerente, de fecha 14 de junio de 2024, por la que se le excluye del procedimiento para la contratación del “suministro de productos consumibles con cesión de equipos para la realización de determinaciones analíticas del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas de la Comunidad de Madrid, en el servicio de bioquímica clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón” (Exp. A/SUM-004379/2024), alegando su indebida exclusión y solicitando su readmisión al procedimiento.

Recibida por el órgano de contratación la solicitud de este Tribunal de remisión del expediente y del preceptivo informe establecido en el artículo 56.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el 8 de julio de 2024, el mismo no ha sido remitido.

En fecha 16 de julio de 2024 la recurrente ha presentado escrito de solicitud de medidas cautelares a la vista de la notificación a esa parte de resolución de adjudicación de ambos lotes, interesando la suspensión de la tramitación del



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018697138449115076709**

expediente hasta que se resuelva el recurso presentado, habida cuenta de los daños y perjuicios que podría ocasionar la formalización del contrato.

El artículo 51.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) establece que en el escrito de interposición se hará constar el acto recurrido, el motivo que fundamenta el recurso, los medios de prueba de que pretende valerse el recurrente y en su caso las medidas de naturaleza cautelar cuya adopción solicite.

La suspensión automática del expediente de contratación en fase de adjudicación, tiene por objeto evitar que con la formalización del contrato se puedan consolidar situaciones de ilegalidad e impedir que se causen otros perjuicios a los interesados afectados, tal y como aparece configurada ya en el artículo 2.3 de la Directiva 89/665/CE (redacción actual dada por la Directiva 2007/66/CE), que dispone la suspensión del procedimiento como garantía de que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato cuando el recurso se plantee contra la decisión de adjudicación de un contrato *“Cuando se someta a un órgano de primera instancia independiente del poder adjudicador un recurso referente a una decisión de adjudicación de un contrato, los Estados miembros garantizarán que el poder adjudicador no pueda celebrar el contrato hasta que el órgano que examine el recurso haya tomado una decisión sobre la solicitud de medidas provisionales o sobre el fondo del recurso”*.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la adopción de la medida cautelar exige que el recurso pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que, de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia (en este caso resolución) que se dicte, e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos, con merma del principio de identidad. Aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero, lo que



obliga a efectuar siempre a un juicio comparativo de todos los intereses en juego, concediendo especial relevancia, a la hora de decidir, a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o al de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado; y, en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional debe atender a las circunstancias particulares de cada situación, y exige motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción o no de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado, el recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar por la perfección del contrato.

En el caso que nos ocupa, pese a que el recurso se interpuso con carácter previo a la adjudicación, no procediendo la suspensión automática, dicha adjudicación ha sido ya acordada por el órgano de contratación, sin que hasta la fecha se haya enviado la documentación solicitada por este Tribunal para la resolución del recurso interpuesto, siendo posible, en la fase de tramitación del expediente que nos encontramos, que se llegue a formalizar el contrato antes de haberse decidido sobre el fondo del asunto.

El recurso especial en materia de contratación tiene como finalidad obtener una resolución rápida y eficaz, de manera que una decisión ilegal no se pueda consolidar, y con la suspensión de la tramitación del expediente de contratación en este supuesto se trata de evitar la posibilidad de causar perjuicios a los interesados afectados y, que, en su caso, se facilite la retroacción de las actuaciones al momento en que se cometió la posible infracción.

De acuerdo con lo anterior, ponderadas las circunstancias del caso y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.3 de la LCSP, este Tribunal por unanimidad,



ACUERDA

Suspender la tramitación del procedimiento para la contratación del “suministro de productos consumibles con cesión de equipos para la realización de determinaciones analíticas del Programa De Cribado Neonatal de enfermedades Endocrino-Metabólicas de la Comunidad de Madrid en el Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón”, número de expediente A/SUM-004379/2024, hasta que se resuelva el recurso y se acuerde expresamente el levantamiento de la suspensión.

Contra el presente Acuerdo no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que se dicte en el procedimiento principal.

LA PRESIDENTA EN FUNCIONES DEL TRIBUNAL
(conforme artículos 3.7 de la Ley 9/2010 y 19.2 LRJSP)

